

# Proyecto de ley que modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en cuanto a la definición de embarcación pesquera artesanal y sus condiciones de habitabilidad.

Boletín 10068-21

Tramitación	Segundo trámite constitucional
Urgencia	Sin urgencia
Discusión	En general y particular
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Diputados: Campos, Flores, Fuentes, Hernández Javier, Pacheco, Sandoval, Ulloa, Urrutia Osvaldo, Urrutia Ignacio, Van Rysselberghe.

**Sugerencia de votación:** A favor

## Objetivo del Proyecto

El proyecto de ley tiene por objetivo definir las condiciones de habitabilidad que deben cumplir las embarcaciones pesqueras artesanales y las que prestan apoyo a la acuicultura, las que deberán estar provistas de elementos y características destinados a otorgar a la tripulación ambientes de seguridad, salud, higiene, confort, y, en general, de espacios de alojamiento, alimentación y aseo que garanticen condiciones dignas de trabajo.

## Antecedentes

El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados el 20 de mayo del 2015. Fue aprobado por la Sala de la Cámara el 12 de abril del 2016 de forma unánime con 115 votos a favor.

En su segundo trámite constitucional en el Senado, el proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los Senadores presentes: Aravena, Muñoz, Castro y Quinteros.

## Contenido

El proyecto de ley consta de un solo artículo, el cual fue aprobado en general y en particular por la Comisión de Pesca.

El proyecto introduce modificaciones al artículo 2º de la ley Nº 18.892, ley General de pesca y Acuicultura.

- Se modifica el numeral 14 del artículo 2 que define “embarcación pesquera artesanal o embarcación artesanal”.

Se suprime la frase “que se encuentren en la cubierta superior” en referencia a donde pueden ubicarse los espacios que se excluyen del volumen total del arqueo bruto, para destinarlo exclusivamente a la habitabilidad y bienestar de la dotación.

- Se agrega un nuevo numeral 14 a) que define que se entiende por embarcación de apoyo a la acuicultura:

*“Es aquella destinada a la instalación, mantenimiento, reparación y retiro de estructuras de cultivo; ingreso y siembra de ejemplares de cultivo y de alimentos e insumos para los mismos; cosecha de ejemplares cultivados; retiro de ejemplares muertos; labores de toma de muestras para controles sanitarios; apoyo a tratamientos farmacológicos; monitoreos ambientales; abastecimiento de agua y combustibles; traslado de personas hacia, desde y entre sitios de cultivo, y abastecimiento de alimentos e insumos para el personal que opera centros de cultivo.”*

- Se agrega un nuevo numeral 14 b) que define que se entiende por condiciones de habitabilidad y bienestar de las embarcaciones artesanales y las artesanales de apoyo a la acuicultura:

*“Son aquellos elementos de seguridad, salud, higiene y confort que deben reunir los espacios destinados a la habitabilidad de las naves a que se refieren los números 14) y 14 a) de este artículo, tales como ubicación, tamaño, materiales, condiciones de higiene, ventilación, calefacción, refrigeración, iluminación, mitigación de ruidos y vibraciones excesivas, aplicables a las zonas de alojamiento, alimentación y aseo de la tripulación.”*

## Comentarios

El proyecto busca asegurar condiciones de seguridad y habitabilidad para embarcaciones pesqueras artesanales y las que prestan apoyo a la acuicultura. Se exige que los espacios de habitabilidad tengan ciertos estándares de seguridad, ubicación, tamaño, condiciones de higiene, ventilación y calefacción entre otros.

De esta forma, se esta dando cumplimiento al artículo 184 del Código del Trabajo que exige cumplir con estándares de seguridad en la faena que deben cumplir los empleadores, para asegurar la protección eficaz de la vida y la salud de los trabajadores manteniendo condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas.

Una vez publicada la ley, a través de un reglamento deberá dentro del plazo de seis meses, determinar las condiciones de habitabilidad y bienestar que deben cumplir las embarcaciones pesqueras artesanales y las pesqueras artesanales de apoyo a la acuicultura, tomando en consideración la zona geográfica donde operan.

Se sugiere aprobar el proyecto de ley.

# Proyecto de ley que modifica las leyes N°s 18.695 y 19.175, para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales

Boletín 11994-34

Tramitación	Segundo trámite constitucional
Urgencia	Sin urgencia
Discusión	En general
Sugerencia votación	En contra
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Diputados: Cariola, Carvajal, Castillo, Cicardini, Hernando Pérez, Jiles Moreno, Marzán, Nuyado, Parra, Pérez Salinas.

**Sugerencia de votación:** A favor

## Objetivo del Proyecto

Fortalecer la representatividad de las mujeres en cargos locales de elección popular -concejales y consejeras regionales- y contribuir a la superación del desequilibrio que les impide acceder a tales cargos, posibilitando una mayor visibilidad de las mujeres dentro de la política.

## Antecedentes

El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados el 08 de agosto del 2018, y fue aprobado el 25 de septiembre del 2019.

En su segundo trámite constitucional, la Comisión de Mujer y la Igualdad de Género aprobó en general el proyecto el 8 de enero del 2020, con el voto favorable de los Senadores Allende, Aravena, Muñoz y Provoste.

## Contenido

El proyecto consta de dos artículos permanentes y tres artículos transitorios que modifican la ley N° 19175 sobre Gobierno y Administración Regional y la ley N° 18.695 de Municipalidades.

Se consagra una cuota de género para las elecciones de cargos plurinominales:

1. Candidaturas a Consejeros Regionales: de la totalidad de candidaturas a consejero regional declaradas por los partidos políticos, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán

superar el 60% de la candidaturas declaradas y aceptadas por el Servel, del total respectivo a nivel nacional.

En el caso de que un partido político sólo presente tres candidatos, ni las candidatas mujeres ni los candidatos hombres podrán ser más de 2 del total.

En el caso de que se presente un solo candidato a nivel nacional, no importará si es hombre o mujer el candidato.

2. Candidaturas a Concejal: opera la misma regla anterior, es decir, del total de candidatos a nivel nacional, ni las candidatas mujeres ni los candidatos hombres podrán superar el 60% de las candidaturas declaradas y aceptadas por el Servel, del total respectivo a nivel nacional.

De la misma forma, si un partido político presenta 3 candidatos, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán ser más de dos.

Este requisito de cuota obviamente no será aplicable cuando se trate de un solo candidato a concejal a nivel nacional.

## **Infracciones**

De incumplirse las normas de cuotas, la infracción consistirá en el rechazo de la totalidad de las candidaturas declaradas, del partido que no haya cumplido con tales requisitos.

## **Temporalidad**

Las normas que señala esta ley regirán solo por un periodo transitorio y durante las elecciones de consejeros regionales en los años: 2021, 2024, 2028 y 2032. Respecto de las elecciones de concejales en los años 2020, 2024, 2028 y 2032.

## **Reembolso Adicional**

Para las elecciones de 2020, 2021, 2024, 2028 y 2032 las candidatas a alcaldesa, gobernadora regional, consejera regional y concejala tendrán derecho a un reembolso adicional de sus gastos electorales, de cargo fiscal de 0,0100 UF por cada voto obtenido.

## **Comentarios**

El proyecto aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados mejoró considerablemente el proyecto original, ya que se limitó la exigencia de cuotas sólo a las elecciones plurinominales, de forma paralela a las elecciones parlamentarias.

Cabe destacar que la exigencia de cuota se realiza según las candidaturas declaradas y aceptadas por el Servel, evitando así, que por rechazar una candidatura, se pueda reemplazar por otra de un sexo diferente, asegurando así, la aplicación de la ley en la papeleta final.

Se sugiere votar a favor de la iniciativa en general.

# Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas pertinentes, la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad.

Boletín 12261-13

Tramitación	Segundo trámite constitucional
Urgencia	Simple
Discusión	En general y particular
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Diputados Ascencio, Cruz-Coke, Eguiguren, Melero, Molina, Saavedra, Sabat, Undurraga, Vallejo y Vidal.

**Sugerencia de votación:** A favor

## Objetivo del Proyecto

La iniciativa tiene por finalidad generar una efectiva integración de los trabajadores con discapacidad dentro de los procesos y dinámicas de las empresas, para lo cual se incluye en el Código del Trabajo la obligación para las empresas de 100 o más trabajadores de contar, al menos, con uno de los trabajadores que se desempeñen en recursos humanos con conocimientos específicos en fomento de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Asimismo, dichas empresas deberán promover políticas de inclusión, y elaborar y ejecutar programas de capacitación en inclusión de personas con discapacidad.

## Antecedentes

El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados el 22 de noviembre de 2018 y fue aprobado el 3 de septiembre con la unanimidad de los Diputados presentes.

En su segundo trámite constitucional en el Senado, el proyecto fue aprobado unánimemente con los votos favorables de los Senadores: Muñoz, Van Rysselberghe y Letelier.

## Contenido

El proyecto de ley consta de un solo artículo, por lo cual fue aprobado en general y en particular por la Comisión de Trabajo.

Este artículo único agrega un nuevo artículo 157 al Código del Trabajo bajo el Capítulo II titulado “De la inclusión laboral de personas con discapacidad”.

- Se exige que a lo menos uno de los trabajadores del área de recursos humanos, en una empresa con más de 100 trabajadores, tengan conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
- Se entenderá que cumple con dichos conocimientos cuando cuenten con una certificación al respecto, otorgada por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.
- Las empresas deberán promover materias de inclusión, las que serán informadas a la Dirección del Trabajo.
- Deberán elaborar y ejecutar anualmente herramientas para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa.

## Comentarios

Cabe destacar que la ley Nº 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral lleva dos años desde su entrada en vigencia. Dicha ley exige a las empresas que tienen 100 o más funcionarios o trabajadores contar con el 1% de su dotación anual con personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez.

Por lo anterior se hace necesario establecer condiciones de trabajo al interior de las empresas y contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas que tienen alguna discapacidad. Este proyecto, busca la especialización de los trabajadores que se desempeñan en recursos humanos, y busca implementar políticas de inclusión que deben ser informadas a la Dirección del Trabajo.

El proyecto según el artículo transitorio, entrará en vigencia a partir del primer día del vigésimo quinto mes después de ser publicada en el Diario oficial.

# Proyecto de ley que Modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana.

Boletín 12288-14

Tramitación	Segundo trámite constitucional
Urgencia	Sin urgencia
Discusión	En general
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Mensaje
Autores	Ejecutivo

**Sugerencia de votación:** A favor

## Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene por finalidad mejorar los niveles de integración social y urbana de las ciudades y lograr un adecuado desarrollo de ellas a lo largo del país, para lo que se pretende aumentar la construcción de viviendas sociales con integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo urbano, y modernizar la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

## Antecedentes

El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados el 5 de diciembre del 2018. El 14 de agosto del 2019 la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general (72 votos a favor, 55 en contra y 1 abstención) y en particular el proyecto de ley.

En su segundo trámite constitucional el proyecto de ley fue discutido y aprobado unánimemente por la Comisión de Vivienda y Urbanismo el 5 de mayo del presente año, con el voto favorable del Senador Sandoval.

## Contenido

El proyecto de ley consta de 3 artículos que tienen como ideas centrales los siguientes puntos:

### 1. Fortalecimiento del Ministerio de Vivienda

- Se cambia el nombre del ministerio de vivienda: Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio
- Se proponen las siguientes funciones nuevas para el ministerio:
  - o La implementación de políticas y programas habitacionales que promuevan la integración e inclusión.
  - o Crear políticas de suelo en terrenos públicos y privados para la integración e inclusión.



- Resguardar por medio de la supervigilancia que los planes reguladores contengan los criterios de inclusión e inclusión.

2. Inclusión de principios de integración e inclusión en los instrumentos de planificación territorial en todos sus niveles.

- Los planes reguladores deberán contemplar medidas que incentiven la construcción de viviendas con subsidio, promoviendo el acceso equitativo a bienes públicos urbanos relevantes.
- Los planes reguladores intercomunales podrán establecer beneficios de normas urbanísticas para proyectos de vivienda integradas.

3. Creación de incentivos para promover el acceso equitativo a bienes públicos urbanos.

- Se busca entregar beneficios urbanísticos a cambio de la construcción de viviendas con subsidio en sectores con carencia de equipamiento, por donde llegará inversión pública relevante.

4. Limitaciones aplicables a viviendas con subsidio para preservar la integración en el tiempo.

- El proyecto busca evitar que a causa de la integración exista un aumento de incentivos para vender los inmuebles una vez cumplido con la prohibición de enajenar, ya que tendrán un valor elevado por su ubicación.

5. Admisión de destinos que promueven la integración e inclusión.

- Los establecimientos para adultos mayores, los jardines infantiles y las salas cunas se entenderán complementarios al uso residencial, siempre admitidos, y la ordenanza municipal no podrá limitarlos.

## Comentarios

Nuestro país en los últimos 40 años duplicó la población y triplicó la cantidad de viviendas, aun así, tenemos un déficit habitacional que supera las 730 mil viviendas. Las cifras de falta de viviendas habían estado bajando sostenidamente durante el tiempo, pero por distintas causas como las familias monoparentales, la inmigración y la crisis económica, estas han aumentado.

El proyecto de ley busca dar una solución a este problema otorgando más facultades al ministerio de vivienda e incentivando la construcción de viviendas sociales. Además, tiene como principal objetivo la inclusión e integración de familias de niveles socioeconómicos bajos con otros niveles socioeconómicos. Esta inclusión permitirá que familias que opten a un subsidio de vivienda puedan gozar de los mismos beneficios que gozan otras familias, como educación, salud y transporte que no tendrían sin esta ley.

Se sugiere aprobar en general el proyecto de ley para discutir nuevamente en particular la posibilidad de concesionar la construcción de viviendas sociales, incentivando la construcción de viviendas sociales y su mantención durante cierto periodo de tiempo, pasando luego el terreno a ser propiedad de las familias o del Estado.



# Proyecto de ley relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral.

Boletines 12322-13, 12327-13 y 9476-13 refundidos.

Tramitación	Veto Presidencial
Urgencia	Sin urgencia
Discusión	Única
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Senadores Goic, Latorre, Letelier, Muñoz y Rincón

**Sugerencia de votación:** A favor

## Objetivo

Este proyecto de ley tiene por finalidad establecer el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral que contempla el Código del Trabajo, respecto de los funcionarios públicos.

## Antecedentes

- El proyecto ingresó al Senado el 18 de diciembre de 2018.
- Fue aprobado en general en la Sala del Senado el 5 de marzo de 2019, con 31 votos a favor, ningún voto en contra y 8 abstenciones. Las abstenciones fueron de los siguientes senadores:
  - o Coloma
  - o Durana
  - o Ebensperger
  - o Galilea
  - o García Huidobro
  - o Prohens
  - o Sandoval
  - o Von Baer
- La Sala del Senado aprobó<sup>1</sup> en particular el proyecto el 12 de marzo de 2019, con 27 votos a favor y 4 abstenciones. Se abstuvieron los siguientes senadores:
  - o Coloma
  - o Ebensperger
  - o García Huidobro
  - o García Ruminot

---

<sup>1</sup> Usted no votó en particular el proyecto.

- El proyecto en segundo trámite fue aprobado por la Sala de la Cámara en particular el 3 de marzo del presente año.
- En su tercer trámite constitucional, el proyecto de ley fue aprobado con 28 votos a favor, ningún voto en contra y 8 abstenciones el 18 de agosto.
- Se abstuvieron los siguientes senadores:
  - o Alvarado
  - o Coloma
  - o Durana
  - o Ebensperger
  - o García Huidobro
  - o Pugh
  - o Sandoval
  - o Von Baer
- El Presidente de la República presentó observaciones al proyecto de ley el 16 de septiembre.

### Contenido del Proyecto de Ley

El proyecto de ley consta de dos artículos:

#### Artículo 1º Interpretación del artículo 485 del Código del Trabajo

Este artículo realiza una interpretación al artículo 485 del Código del trabajo, a fin de contemplar la tutela laboral para los funcionarios públicos. Se incluye a aquellos funcionarios de la administración del Estado, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, trabajadores de empresas o instituciones del Estado o aquellas en que tengan aportes, participación o representación. Además, se hace extensivo a funcionarios que se desempeñen en el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Justicia Electoral, Contraloría General de la República, Banco Central y a todos los trabajadores de entidades que las leyes declaran como autónomas.

#### Artículo 2º Se modifica los artículos 486 y 487 del Código del Trabajo

Artículo 486: tiene por objeto precisar el ámbito de atribuciones que dispondrá la dirección del trabajo para evaluar y denunciar los hechos que considere una vulneración de derechos fundamentales.

Artículo 487: tratándose de funcionarios o trabajadores del sector público, no procederá el sistema indemnizatorio del sector privado y la posibilidad de que el trabajador opte por la reincorporación al servicio solamente cuando la discriminación de que fue objeto sea calificada en la sentencia como grave.

## Comentarios del Proyecto de Ley

El procedimiento de tutela laboral se lleva ante los tribunales del trabajo y se aplica principalmente a trabajadores del sector privado. Este procedimiento tiene por objetivo resguardar y proteger los derechos fundamentales de los trabajadores dentro del ámbito de la empresa, protegiendo al trabajador frente a vulneraciones de derechos ocasionados por el empleador, por ejemplo: discriminación, acoso laboral, salud física y psíquica etc.

Hoy este procedimiento está destinado a trabajadores regidos por el Código del Trabajo, excluyendo a los trabajadores del sector público, cuyos derechos se encuentran resguardados por otros instrumentos o mecanismos y por el accionar de la Contraloría General de la República. Es este organismo, y no la dirección del trabajo, quien hoy vela por la protección de los derechos de los funcionarios públicos.

Varias interpretaciones de la Corte Suprema han hecho aplicable la tutela laboral al sector privado, sin embargo, el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre de 2018, estimó que comprender a los funcionarios públicos en el ámbito de aplicación de la tutela laboral *“desvirtúa el régimen constitucional y legal que le es propio, amen de abrir la intervención de los juzgados de letras del trabajo respecto de una materia que no han recibido expresa competencia legal”*.

Se sugiere votar en contra del proyecto, ya que es la Contraloría General de la República quien tiene la facultad y competencia para velar por los derechos fundamentales de los funcionarios públicos. Hacer aplicable la tutela laboral a los funcionarios públicos genera una serie de problemas relacionados con las facultades que tendrá la Dirección del Trabajo versus las facultades de la Contraloría. Además, creemos que la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional es adecuada, hoy los tribunales del trabajo conocen la vulneración de derechos ocasionada a trabajadores del sector privado, no de funcionarios públicos.

La Contraloría no ha podido manifestar su opinión respecto al proyecto, siendo que es el ente encargado hoy de velar por los derechos fundamentales de los funcionarios públicos. Esta ley sólo se hace necesario en la medida de que la Contraloría no esté realizando adecuadamente sus funciones, y aún así, se debería legislar para asegurar que la Contraloría realice su competencia como corresponde, sin alterar la institucionalidad vigente.

Finalmente, consideramos que el quorum de aprobación debiera ser de LOC, al incorporar y modificar atribuciones de los tribunales del trabajo, pero la comisión del Trabajo determinó que es de quorum simple (con el voto en contra de la Senadora Van Rysselberghe).

## Comentarios del Veto

Como ya se señaló el régimen de tutela laboral actualmente rige por regla general a los trabajadores del sector privado, ya que el sector público tiene sus propias características, como el rol que juega la Contraloría para velar por los derechos de los funcionarios públicos.

El Ejecutivo, para precisar ciertos aspectos del proyecto ha presentado varias observaciones, las que destacan las siguientes:

### 1. Atribuciones de la Dirección del Trabajo

El proyecto de ley le otorga facultades y competencias que le son propias de la Contraloría General de la República a la Dirección del Trabajo para velar por la correcta aplicación del régimen de tutela laboral.

Por lo anterior, se elimina las atribuciones que se pretendía otorgar a la Dirección del Trabajo en relación a los funcionarios público.

## **2. Normativa aplicable a las Fuerzas Armadas y las fuerzas de Orden y Seguridad Pública**

Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, están regulados en el Capítulo XI de nuestra carta fundamental. Las FF.AA tienen características propias tomando en consideración las especiales funciones que deben cumplir, y tienen estatutos específicos que regulan a su personal.

La observación busca precisar y aclarar que la normativa de este proyecto de ley no es aplicable a las FF.AA y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

## **3. Relación del procedimiento de tutela laboral con el reclamo funcional ante la CGR**

Los funcionarios públicos podrán presentar un reclamo funcional que se lleva ante la CGR cuando se vulnera un derecho contenido en el Estatuto, cuyo plazo es de 10 días desde que se tuviera conocimiento de la situación.

En el caso de que la CGR constate la vulneración alegada en caso de una desvinculación, puede ordenar la reintegración del funcionario vulnerado al servicio, sin que pueda establecer el pago de indemnizaciones.

La observación propone que el plazo de interposición de la tutela laboral, se suspenda mientras se encuentre el reclamo funcional que conoce la CGR, de esta forma se regula la interacción entre ambos procedimientos y se evita acciones simultaneas sobre un mismo hecho.

Se sugiere votar a favor del Veto Presidencial.

Proyecto de ley, que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del servicio nacional de menores y aquellos con necesidades educativas especiales permanentes.

Boletín 12486-04

Tramitación	Primer trámite constitucional
Urgencia	Discusión Inmediata
Discusión	En general
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Mensaje
Autores	Ejecutivo

**Sugerencia de votación:** A favor

### Objetivo del Proyecto

El proyecto busca perfeccionar el Sistema de Admisión Escolar creado por la ley N° 20.845, de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes regulares del Estado, permitiendo que los establecimientos educacionales utilicen mecanismos y criterios de admisión propios vinculados a sus proyectos educativos para hasta un 30% de sus cupos de acuerdo a sus proyectos educativos, siempre que sean transparentes, objetivos y no signifiquen discriminaciones arbitrarias; e incorporar nuevos criterios justicia e inclusión en el orden de prioridades establecidas en la ley para el caso en que los establecimientos se enfrenten a más postulantes que vacantes.

### Antecedentes

El proyecto de ley iniciado en mensaje ingresó al Senado el 20 de marzo de 2019. La Comisión de Educación aprobó el proyecto de ley en general con la unanimidad de los Senadores presentes: Provoste, Von Baer, García, Latorre y Quintana.

### Contenido

El proyecto de ley consta de un solo artículo, sin embargo, la Comisión de Educación decidió aprobar sólo en general el proyecto de ley.

### Ideas Centrales del Proyecto de Ley

## 1. Nuevas Prioridades

Se incorporan dos prioridades en el actual Sistema de Admisión Escolar:

- La primera prioridad es para los niños que se encuentran bajo el cuidado de la red Sename.
- La segunda prioridad va dirigida a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes. Tendrán prioridad para ingresar a colegios con Programa de Integración Escolar (PIE).

## 2. Mejora en los Criterios de Prioridad

- Una prioridad es la existencia de hermanos o hermanas que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento, el proyecto amplía este criterio haciéndolo extensivo a los postulantes que sin ser hermanos pertenezcan a un mismo hogar (hermanos no consanguíneos).
- Se permite a los establecimientos educacionales ampliar su cuota de estudiantes vulnerables hasta 100%. Cabe recordar que hoy el máximo posible es de un 15% de las matriculas. Lo anterior sólo se aplica a los colegios que se encuentran en las dos categorías más altas de acuerdo a la ordenación de la Agencia de Calidad de la Educación.

## 3. Permite a los establecimientos determinar su propio mecanismo de admisión para el 30% de sus vacantes.

- Se permite a los establecimientos determinar sus propios mecanismos de admisión hasta el 30% de sus vacantes. Los criterios deberán ser transparentes, objetivos y no podrán discriminar arbitrariamente a los postulantes.
- Se permite las entrevistas durante todo el proceso de postulación y admisión, siempre y cuando sean voluntarios y con la finalidad de entregar información del proyecto educativo. Sin embargo, una vez determinado el establecimiento por el SAE, no se podrán efectuar entrevistas.

## Comentarios

El proyecto permite a los padres tener mayor libertad al momento de elegir un establecimiento educacional para sus hijos, ya que los establecimientos tendrán libertad para establecer sus propios mecanismos de admisión hasta un 30% de los vacantes.

Para asegurar la libertad de elección es importante que existan reglas justas que regulen el acceso a las escuelas del país, y que la oferta educativa sea capaz de albergar una diversidad suficiente para que las familias puedan encontrar proyectos educativos que tengan los mismos principios y valores que quieren traspasar a sus hijos.

El sistema actual fue implementado por el Gobierno de la Presidente Michelle Bachelet, sin tomar en consideración las brechas de calidad que se generan en la oferta educativo, la que no permite una mayor diversidad de proyectos educativos.



El proyecto permite una verdadera libertad de enseñanza, manteniendo los elementos de justicia, objetividad y no discriminación arbitraria del sistema actual.

Cabe destacar la prioridad que se les otorga a los niños que se encuentran en la red Sename y que tienen Necesidades Educativas Especiales. Estos niños requieren de mas apoyo y ayuda que los demás, y por eso es importante que puedan postular a los colegios con prioridad por sobre los demás.

Además, el proyecto al permitir un sistema libre de admisión hasta el 30% de las vacantes, soluciona los problemas de los colegios que operan como internados y que no han podido llenar todas sus vacantes como el INBA que tiene 80 matriculados con una capacidad de 800. De esta forma se permitirá que el 30% de las matriculas puedan ser llenados por alumnos fuera de la comuna del colegio.

Se sugiere aprobar el proyecto de ley, ya que viene a dar una solución a las fallas del sistema SAE de forma integral y como un todo, a diferencia del proyecto paralelo impulsado por senadores de oposición.

# Proyecto de ley que prorroga la vigencia de las cédulas de identidad para el efecto de participar en las elecciones y plebiscitos que se realicen entre la publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 2021.

Boletín 13745-06

Tramitación	Primer trámite constitucional
Urgencia	Sin urgencia
Discusión	En general y particular
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Senadores Araya, Bianchi, Ebensperger, Elizalde e Insulza.

**Sugerencia de votación:** A favor

## Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene por finalidad permitir el uso de las cédulas de identidad o pasaportes vencidos al 1 de octubre de 2019, para participar en las elecciones y plebiscitos que se realicen entre la publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 2021, para el sólo efecto de identificar al elector.

## Antecedentes

El proyecto se presentó al Senado el 26 de agosto del 2020, ingresando a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Dicha comisión el 2 de septiembre aprobó la iniciativa de forma unánime, incluyendo del voto favorable de la Senadora Luz Ebensperger. La Sala del Senado aprobó la iniciativa en general y en particular el 22 de septiembre con 38 votos a favor y ningún voto en contra.

En su segundo trámite el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados, con modificaciones, con el voto a favor de 120 diputados y ningún voto en contra.

## Contenido

El proyecto de ley consta de un solo artículo, por lo cual fue aprobado en general y en particular por la Comisión de Gobierno.

- Permite utilizar cédulas de identidad o pasaportes que hayan vencido a contar del 1 de octubre de 2019 para efectos de identificarse en las elecciones o plebiscitos que se realicen entre la publicación de esta ley **y el termino del proceso constituyente<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Única modificación realizada en la Cámara de Diputados, originalmente señalaba que era hasta fines de diciembre 2021.

- La misma regla anterior se aplicará a los extranjeros y sus cédulas de identidad.

## Comentarios

Este proyecto va en la misma línea de lo decretado por el Ejecutivo el 23 de marzo pasado, cuando se anunció que, para evitar aglomeraciones, se extendía la vigencia de todas las cédulas de identidad para chilenos que expiren dentro del 2020.

Este proyecto se hace necesario toda vez que dicho decreto extendía la vigencia de las cédulas, pero con ciertas excepciones, siendo una de ellas lo relativo a las votaciones populares y escrutinios. Por lo anterior se hace necesario esta ley que permite utilizar cédulas de identidad y pasaportes vencidos para efectos de identificarse en las elecciones que existan este año.

# Proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.

Boletín 13745-06

Tramitación	Insistencia
Urgencia	Discusión Inmediata
Discusión	Insistencia
Sugerencia votación	A favor
Origen de la Iniciativa	Mensaje
Autores	Ejecutivo

**Sugerencia de votación:** A favor

## Objetivo del Proyecto

El proyecto de ley tiene por finalidad reajustar el ingreso mínimo mensual por inflación, para mantener el poder adquisitivo en relación al último reajuste realizado.

## Antecedentes

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 31 de agosto del año en curso. La Cámara el 9 de septiembre rechazó el proyecto de ley con 53 votos a favor, 78 votos en contra y 14 abstenciones.

De la UDI votaron **en contra**:

- Iván Norambuena
- Rolando Rentería
- Virginia Troncoso

De la UDI se **abstuvieron**:

- Sandra Amar
- Sergio Bobadilla
- Álvaro Carter
- Joaquín Lavín
- Celso Morales
- Nicolás Noman
- Gustavo Sanhueza
- Ignacio Urrutia (bancada UDI)
- Osvaldo Urrutia

Tomando en consideración que, al rechazarse la idea de legislar un proyecto de ley, no se puede presentar un proyecto con la misma idea matriz durante un año, el Ejecutivo se vio en la obligación de **insistir**, por lo

que el Senado tuvo que discutir la insistencia. Dicha insistencia fue aprobada en la Sala el 22 de septiembre, con 40 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.

El proyecto de ley volvió a su primer trámite constitucional donde finalmente fue aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados, con modificaciones, el 30 de septiembre con 58 votos a favor, 78 en contra y 4 abstenciones.

En su segundo trámite constitucional, el proyecto fue aprobado en la Comisión de Hacienda del Senado por la unanimidad de sus miembros.

## **Contenido**

El proyecto de ley consta de 7 artículos permanentes:

### **I. Ingreso mínimo propiamente tal**

#### **Artículo 1º**

- Se incrementa el ingreso mínimo mensual, para mayores de 18 y menores 65, de \$320.500 a \$326.500, a contar del 1 septiembre de 2020.

#### **Artículo 2º**

- Se incrementa el ingreso mínimo mensual para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años a \$243.561.

#### **Artículo 3º**

- El ingreso mínimo mensual con fines no remuneracionales será de \$210.485, desde el 01 de septiembre de 2020.

### **II. Reajuste de la asignación familiar, maternal y subsidio familiar**

#### **Artículo 4 y 5**

- Se realiza un reajuste a la asignación familiar, maternal y del subsidio familiar para personas de escasos recursos.

#### **Artículo 6**

- A más tardar en el mes de abril de 2021, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar con el objeto de que comience a regir a contar del 1 de mayo de 2021.

## Artículo 7º

- Sostiene que la fuente de financiamiento del mayor gasto que represente la aplicación de esta ley en el año 2020, será con cargo del Tesoro Público. En el año 2021 serán provistos por la respectiva ley de Presupuestos del Sector Público.

## Comentarios

El proyecto de ley de reajuste del ingreso mínimo sin duda va a generar una ola de críticas en el Senado debido al poco aumento real que existe, pero es sumamente importante situarnos dentro del contexto histórico que esta viviendo nuestro país.

La FMI y la OCDE proyectaron en junio que el PIB mundial para fines de 2021 será inferior en más de 6 puntos porcentuales de lo que se esperaba a inicios de año, y según la OCDE, podría llegar hasta 10 puntos porcentuales tomando en consideración la “segunda ola de contagios”. Según lo establecido en el IPoM de junio, el valor central estimado para el PIB de Chile para el próximo año estará casi 10 puntos porcentuales por debajo del nivel que se esperaba del año pasado.

Por una parte, la pandemia ha significado dejar sin trabajo a más de 1.8 millones de personas. Además, hay más de 700 mil trabajadores con contratos de trabajo suspendidos siendo beneficiados por la ley de protección al empleo. El 70 % de los trabajadores con contratos suspendidos son trabajadores de Pymes, y 3 de cada 4 trabajadores que ganan el sueldo mínimo trabajan en Pymes. Las Pymes siempre han sido el motor económico y el sector que más trabajos otorga, sin embargo, debido a la crisis sanitaria y anteriormente el estallido social, muchos se encuentran al borde de cerrar por falta de recursos. Cabe destacar que los más afectados con esta crisis son las Microempresas, justamente el sector que tiene un 43% de los trabajadores con sueldo mínimo.

El 60% de los trabajadores con sueldo mínimo tienen un nivel de educación igual o inferior a la educación media, y un 32% tiene entre 18 y 30 años. Las mujeres, otro grupo muy afectado por la pandemia, ha tenido la destrucción de empleo asalariado de un 12,5%, la que contrasta con el de los hombres, un 10,2%.

También es importante destacar el efecto que ha tenido la Ley de Ingreso Mínimo Garantizado, la que estableció un piso de ingresos garantizados para las personas más necesitadas.

Aumentar el ingreso mínimo implicaría aún más pérdida de trabajos y la destrucción de más Pymes, la que como dijimos, es el gran empleador y productor de trabajos. La capacidad de los empleadores para mantener a sus trabajadores ya ha disminuido, y se esperan que en el futuro siga aumentando los niveles de desempleo. Sería irresponsable imponer una mayor carga a las Pymes de nuestro país, y generaría el efecto contrario al deseado, aumentando el desempleo y el trabajo informal.

Por lo anterior, se sugiere votar a favor de la insistencia.

# Proyecto de ley que modifica las normas de admisión escolar para facilitar el acceso de estudiantes a los establecimientos educacionales con modalidad de internado y de aquellos con necesidades educativas especiales permanentes.

Boletín 13795-04

Tramitación	Primer trámite constitucional
Urgencia	Sin urgencia
Discusión	En general y particular
Sugerencia votación	Abstención
Origen de la Iniciativa	Moción
Autores	Senadores; José García Ruminot, Carlos Montes, Jorge Pizarro, Yasna Provoste, Jaime Quintana.

**Sugerencia de votación:** Abstención

## Objetivo del Proyecto

El proyecto tiene por objetivo exceptuar del sistema de admisión escolar (SAE) a un porcentaje de cupos para la matrícula de estudiantes que deseen ingresar a los establecimientos que funcionan bajo la modalidad de internados, entregando a las comunidades escolares su determinación, como, también, a los establecimientos educacionales regulares con proyectos de integración escolar (PIE), respecto a sus cupos para niños integrados.

## Antecedentes

El proyecto ingresó al Senado el 16 de septiembre y fue aprobado en general y en particular por la Comisión de Educación el 28 de septiembre, con la unanimidad de los Senadores presentes (no votó el Senador Claudio Alvarado).

## Contenido

El proyecto de ley consta de un solo artículo, por lo cual fue aprobado en general y en particular por la Comisión de Educación.

### Numeral 1

Este numeral busca que establecimientos educacionales regulares con proyectos de integración escolar pasen a regirse en su totalidad por el Sistema de Admisión Escolar como sistema de admisión, eliminando la excepción que establece el Artículo 7º septies. De esta forma no podrán tener un procedimiento de admisión determinados por ellos.

## Numeral 2

Este numeral exige que los establecimientos que tengan la modalidad de internado consideren cupos especiales dentro del total de la matrícula disponible, para la postulación de los estudiantes de fuera de la comuna en que dichos internados se encuentren.

Estos establecimientos para acogerse a esta modalidad, deberán informar al Ministerio de Educación la cantidad de cupos especiales con al menos dos meses de anticipación a la fecha de postulación, los que no podrán ser inferiores al 50% de los cupos disponibles.

## **Comentarios**

Cabe mencionar que el Ejecutivo se hace cargo de los temas que menciona esta iniciativa legal en el proyecto de ley que se encuentra en cuarto lugar de la tabla del día de hoy: Admisión Justa 2.0. Este proyecto viene a solucionar varias falencias del Sistema de Admisión Escolar, de forma completa y de forma integral.

Sin embargo, el proyecto de ley de los Senadores busca “anticiparse” a con la finalidad de “parchar” los problemas y estar en una tramitación más avanzada que el proyecto del Ejecutivo. De esta forma, se estaría evitando tener que discutir y aprobar la iniciativa de ley iniciado por el Presidente de la República.

Respecto del fondo, el numeral 1 pareciera perjudicar más que ayudar, ya que obliga a los establecimientos educacionales con programas de integración escolar someterse en su totalidad al SAE, sin flexibilidad alguna en el proceso de admisión.

En cuanto al numeral 2, pareciera ser una solución para los establecimientos educacionales que funcionan en una modalidad de internados. Dichos establecimientos han sufrido una baja en sus matrículas debido a la dificultad que tienen alumnos de otras comunas para postular a ellas, ya que el SAE toma como elemento determinante la georreferenciación al momento de postular a los distintos establecimientos. El INBA por ejemplo, ha tenido este año 80 estudiantes matriculados teniendo un total de 800 cupos totales.

En conclusión, se sugiere abstenerse en la votación, con la finalidad de que estos temas formen parte de una solución integral en la ley que propone el Ejecutivo, iniciativa conocida como “Admisión Justa 2.0”.



## Inadmisibilidad

La finalidad de los vetos presidenciales es buscar un acuerdo entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, permitiendo que se vuelva a discutir y analizar una norma. Esta herramienta es propia de los países presidencialistas, y se puede estar de acuerdo o no en dicho sistema, pero no se puede eliminar una facultad que ha existido desde la Constitución de 1833.

En definitiva, lo que han hecho Senadores de la oposición es ocupar distintas herramientas tramposas para dejar sin efecto la facultad constitucional del Presidente de la República de vetar un proyecto de ley, consagrado en el artículo 73 de la Constitución de la República.

La primera de ellas es declarar inadmisibles las observaciones del veto, de esa forma no se discute el fondo y no se requiere de 2/3 para insistir en el texto aprobado por el Congreso.

La segunda trampa es recalificar las observaciones de sustitutivas a aditivas, y de esta forma, tampoco tendrían la obligación reunir los 2/3 que se exigen para insistir en las observaciones sustitutivas y supresivas, bastando la mayoría simple para que se mantenga el texto original aprobado por el Congreso. Una norma supresiva no puede ir en contra de las ideas matrices del proyecto, salvo que elimine la idea matriz propiamente tal, lo que no sucede con las observaciones del Presidente de la República.

El artículo 73 de la Constitución Política de la República limita, en su inciso segundo, al veto presidencial señalando que no se podrán admitir observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Dicha limitación es reiterada en el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Así, el veto presidencial debe ajustarse siempre a las ideas matrices o fundamentales. ¿Qué entendemos por “ideas matrices”? El Tribunal Constitucional lo ha definido como “Aquellas que sirven de base para un proyecto y en las cuales se apoyan otras ideas de carácter secundario o derivado”<sup>1</sup>.

Las observaciones presentadas tienen el carácter de aditivo, sustitutivo y supresivo. La oposición ha declarado inadmisibles varias observaciones, siendo la mayoría de ellas supresivas. Por ejemplo, la observación que elimina el “amarre”, que se hace al proyecto de garantía de ninguna forma atenta contra la idea matriz del proyecto, ya que es supresivo. Es irrisorio declarar inadmisible esta observación tomando en consideración que no afecta las ideas matrices del proyecto de ley al eliminar el amarre que existe, al contrario, busca que el objetivo principal del proyecto se lleve a cabo, que se implemente el nuevo servicio lo antes posible y va en directa relación con lo señalado en el mensaje del proyecto.

Los derechos consagrados en el proyecto de garantías no crean derechos nuevos, sino que establece una “ley marco” que aterriza los derechos consagrados en los tratados internacionales

---

<sup>1</sup> STC roles N°s 410, 719 y 259

aprobados y ratificados por nuestro país dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es importante destacar que cuando se tratan de tratados que versan sobre derechos humanos, nuestra Constitución los entiende incorporados a nuestro ordenamiento jurídico en virtud de su artículo 5º. De esta forma, es irracional pensar que es necesario la aprobación del proyecto de Garantía de la Niñez para que el proyecto que Crea el Servicio de Protección sea eficaz, ya que estos derechos actualmente deben ser respetados.

Cabe recordar que dicha indicación que amarra el proyecto fue aprobada literalmente en los últimos minutos de la comisión mixta, sin un debate de fondo de la indicación. Además, las comisiones mixtas están constituidas con la finalidad de resolver las divergencias que existen entre ambas cámaras sobre un proyecto de ley determinado, y la indicación aprobada nada tiene que ver con las diferencias que existían entre ambas Cámaras.

Otro ejemplo de una observación (esta vez sustitutiva) declarada inadmisibile es aquella que defina la autonomía progresiva y agrega el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos como principios rectores del Servicio. Es evidente que ambos principios buscan el interés superior del niño y que de ninguna forma atenta contra la idea matriz del proyecto original. Es más, el mismo mensaje del proyecto de ley establece la importancia y rol principal que juega el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El propio artículo 73 de la CPR señala que una observación no va en contra de las ideas matrices si el tema esta considerado en el mensaje respectivo. Pero nuevamente los senadores de oposición para evitar la discusión de fondo lo declararon inadmisibile.

## **Derecho Preferente**

Otro aspecto fundamental del veto Presidencial es el resguardo y protección del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, para ello el Presidente de la República presentó 3 observación en esta dirección. Este derecho no solo esta consagrado en el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 12.4.

El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos no es un mero “slogan” o principio meramente declarativo que conviene mencionar de vez en cuando en nuestra legislación. Este derecho define como entendemos que debe ser nuestra sociedad. La Constitución en el Artículo 1 inciso segundo nos señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado resguardar y dar protección a la familia. En este sentido, el deber y derecho que tienen los padres de educar a sus hijos en los valores y principios que estimen convenientes para su formación y desarrollo, es parte integral y fundamental dentro de una familia, y por ende la sociedad toda.

Existe una tendencia en los últimos, de relegar este derecho a un segundo plano, a un rol secundario en la formación de los niños, como si los padres no fueran fundamentales en el desarrollo de sus hijos. Se destaca el derecho a la autonomía progresiva de los niños como un valor superior y que limita la orientación y guía que pueden ejercer los padres. Es de toda lógica que mientras van creciendo y madurando los niños adquieren más responsabilidad y libertad para ejercer sus derechos, pero eso no quita valor y al rol fundamental que juegan los padres en la formación de sus hijos. Los padres tienen la obligación y el derecho de formar a sus hijos, de guiarlos y de prepararlos, según sus valores y criterios, para ser adultos responsables e independientes capaces de ser un aporte a la sociedad.

Pretender limitar este derecho a la luz de la autonomía progresiva es pretender debilitar este rol fundamental que juegan los padres, como si fueran parte del problema o el enemigo de los derechos de sus hijos. Todo lo contrario, el derecho preferente permite a los padres asegurar que los derechos de los niños sean resguardados, respetados y ejercidos de forma responsable. El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos es fundamental a la hora de proteger el interés superior de los niños, es un aliado de los niños, no su enemigo. Pensar que el Estado debe limitar este rol y entrometerse en la formación de nuestros hijos es un tremendo error, ya vimos como el Sename no pudo resguardar los derechos de los niños e incluso fue quien vulneró muchas veces sus derechos. ¿Qué nos hace pensar entonces que el Estado puede hacer un mejor trabajo que los padres? No existe un sustituto a los padres, y la oposición no debe enfrentar a los padres en contra del Estado.

En la discusión el proyecto de garantía de la niñez hemos discutido este tema a la luz de los derechos que se garantizan a los niños y niñas. Los padres tienen que tener la facultad para autorizar o no que sus hijos participen de marchas y protestas, deben poder estar al tanto de lo que sus hijos hagan en el internet y orientarlos protegerlos de terceros, deben jugar un rol en el ejercicio de cada uno de los derechos que se garantizan.

Sin embargo, el proyecto final resalta el principio de autonomía progresiva sin el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, lo anterior ha sido interpretado como que los niños pueden ejercer sus derechos sin limitación alguna y sin la orientación de los padres. La observación busca definir la autonomía progresiva consagrando también el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos.

Lamentablemente los senadores de oposición en la Comisión de Infancia declararon inadmisibles las observaciones en esta materia, tanto la observación al artículo 4º, que define la autonomía progresiva y consagra el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, como el artículo 6º que tiene la misma finalidad. Se declaró inadmisibles argumentando que la consagración de este principio escaparía a las ideas matrices del proyecto de ley.

Es notorio y evidente que la indicación es admisible ya que el propio mensaje del proyecto de ley señala dentro de sus fundamentos, el rol decisivo de la familia durante la niñez y consagra el principio preferente de los padres a educar a sus hijos como principio rector del nuevo servicio.

## **Atraso**

La indicación que amarró el proyecto de ley establece una tremenda incertidumbre respecto de cuando podría entrar en vigencia el nuevo Servicio que es tan necesario para miles de niños y niñas de nuestro país. La indicación no consagra un plazo, es decir, un hecho futuro y cierto, sino que la condiciona, es decir este ligado a un hecho futuro e incierto, que puede llegar a pasar o no. El proyecto de Garantía de la Niñez ha tenido una discusión larga y ardua debido al desequilibrio que existe entre la autonomía progresiva y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Es más, se había logrado en enero un acuerdo para incluir el derecho preferente en varios pasajes del proyecto para lograr un equilibrio, pero los senadores de oposición dieron marcha atrás y dejaron sin efecto dichos acuerdos, que fueron votados en su momento. Es decir, el proyecto de garantía aún no se sabe cuando podría ser aprobado y despachado al Ejecutivo para su sanción, aprobación y publicación.

El amarre se fundamentó señalando que se busca otorgar la protección de los niños y niñas sujetos del Servicio, y por ende se debía establecer un sistema de garantía de los derechos de la niñez antes de su implementación. Lo curioso es que atrasar la entrada en vigencia del Servicio, deja a los niños a la merced del Sename, sistema que sabemos que no ha podido resguardar adecuadamente los derechos de los niños más vulnerables de nuestro país, es más, ha sido el culpable en muchas ocasiones de vulnerar los derechos de los niños.

En conclusión, el veto presentado por el Presidente de la República en ningún momento atenta contra de las ideas matrices del proyecto, y la declaración de inadmisibilidad hecha en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Infancia del Senado tiene una clara finalidad, dejar sin efecto por medio de un subterfugio una facultad constitucional del Presidente de la República. Debemos establecer cual es nuestra prioridad, lograr un dividendo político al oponerse al Veto del Presidente de la República o el bienestar de miles de niños que requieren de una solución rápida y eficaz. Los niños no pueden estar en segundo plano para satisfacer las pretensiones políticas de un sector político.

## Fallo del TC sobre TV Digital

A raíz del veto presentado por el Presidente de la República al proyecto de ley de TV Digital, el TC, a solicitud de varios parlamentarios, se pronunció sobre si tenía o no la competencia para analizar las declaraciones de inadmisibilidad de un veto presidencial.

Lo curioso es que el mismo Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la vinculación de indicaciones con la idea matriz de un proyecto, y de esta forma se evitó y eliminó la mala práctica de crear “leyes misceláneas” que versaban sobre distintos temas no relacionados entre sí.

Pero cuando se trata de la vinculación de una observación del Presidente de la República con las ideas matrices del proyecto, el TC se declaró incompetente para conocer de la materia, señalando que la Constitución no regula la admisibilidad o inadmisibilidad de un veto presidencial, y que dicha materia está regulada en la LOC del Congreso Nacional.

Sin embargo, si analizamos el artículo 73 de nuestra Carta Fundamental, podemos ver que el propio constituyente estableció un límite al veto, señalando:

*“En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo”.*

Es decir, la admisibilidad o inadmisibilidad de un veto presidencial si se encuentra regulada en la Constitución, y el Tribunal Constitucional si tiene la competencia para conocer de la materia.

Concluir lo contrario generaría un precedente que impone una práctica más bien de un régimen parlamentarista en nuestro régimen constitucional sin modificarla, amenazando la capacidad de la minoría para tomar parte en el debate legislativo, como pretenden hacer la oposición. Y en concreto, dejaría la posibilidad de dejar sin efecto todos los vetos del Presidente de la República.

## Proyectos de Acuerdo

1. Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva dar por cumplidos, por el año 2020, los programas de mejoramiento de gestión y convenios de desempeño de los funcionarios públicos a causa de la pandemia causada por el Covid 19.

### Autores

1. Provoste
2. Allende
3. Muñoz
4. Órdenes
5. Rincón
6. Araya
7. Bianchi
8. Castro
9. De Urresti
10. Elizalde
11. Girardi
12. Guillier
13. Huenchumilla
14. Insulza
15. Lagos
16. Latorre
17. Letelier
18. Montes
19. Navarro
20. Pizarro
21. Prohens
22. Quintana
23. Quinteros

### Objetivo

El proyecto de acuerdo tiene por finalidad dar por cumplido los programas de mejoramiento de gestión y convenios de desempeño de los funcionarios públicos a causa de la pandemia causada por el Covid-19, del año 2020.

### Comentarios

¿Qué son los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG)?

Son incentivos de carácter monetario que los Servicios Públicos otorgan para sus funcionarios al cumplirse ciertas metas y objetivos anuales comprometidos. Hay un total de 194 instituciones involucradas y 87 mil funcionarios beneficiados de este incentivo.

¿Qué son los Convenios de Desempeño Colectivo?

Es una herramienta de gestión orientada a incentivar el trabajo en equipo y el cumplimiento de metas institucionales, que se traduce en un aporte monetario para los funcionarios. Las metas se evalúan y de cumplirse se aumentan las remuneraciones de los funcionarios involucrados.

## **Conclusión**

Dar por cumplido todas las metas implica una falta de probidad que exige nuestra Constitución Política en su artículo 8º. En un momento donde escasean los recursos y las necesidades van en aumento, no se sugiere dar por aprobado las metas sin su efectivo cumplimiento, otorgando recursos económicos a funcionarios públicos por el sólo hecho de ser funcionarios públicos.

Lo adecuado sería que las metas y objetivos se readecuaran tomando en consideración las dificultades que ha generado la pandemia, y sólo en los casos en que se ha hecho imposible su cumplimiento por causa de ella.

El Gobierno ha otorgado beneficios económicos y sociales tomando en consideración la crisis sanitaria que vivimos, pretender ocupar la pandemia como modo de justificar dar por aprobado todas las metas no parece lo mas adecuado.

Se sugiere votar en contra.

**2. Proyecto de Acuerdo por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República y a los Ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social que, si lo tiene a bien, se sirvan implementar una política adicional al Plan Clase Media que permita postergar el pago de créditos sociales que pensionados adeudan a las Cajas de Compensación, de manera que en tiempos de crisis sanitaria, social y económica los jubilados puedan disponer de la totalidad de su pensión.**

## **Autores**

1. Bianchi
2. Allende
3. Goic
4. Muñoz
5. Órdenes
6. Provoste
7. Rincón
8. Araya
9. Castro
10. De Urresti
11. Girardi
12. Huenchuilla
13. Insulza
14. Latorre
15. Letelier
16. Montes
17. Navarro
18. Pizarro



- 19. Prohens
- 20. Quinteros
- 21. Sandoval \*
- 22. Soria

## **Objetivo**

El proyecto de acuerdo busca postergar el pago de los créditos sociales que pensionados adeudan a las Cajas de Compensación, para que los jubilados puedan disponer de la totalidad de su pensión.

## **Comentarios**

Las cajas de compensación de asignación familiar por ley tienen el derecho y la facultad de exigir a las entidades pagadores de pensiones que se descuenten de las pensiones de los afiliados, lo adeudado, por concepto de aporte de crédito social, pudiendo llegar dicho descuento al 100% de los pensionados.

Parece razonable que esta medida forme parte del plan clase media implementado por el Gobierno, ya que contempla la posibilidad de postergar el pago de créditos hipotecarios. Con esta medida, se va a proteger a los adultos mayores que son deudores de créditos sociales otorgados por una caja de compensación.

De todos modos, cabe señalar que los pensionados durante esta crisis no han visto disminuido sus ingresos, las pensiones son pagadas y los descuentos se hacen de acuerdo a lo que corresponde realizar. Sin embargo, podrían ver sus gastos aumentados tomando en consideración las necesidades que ha generado la pandemia, haciendo razonable.

Por lo anterior, se sugiere aprobar el proyecto de acuerdo.

1. Boletín 2103-12

Informe de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado recaído en la solicitud del Grupo Bicameral de Transparencia para aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana en el Congreso Nacional.

**Objetivo:** Se pretende integrar la participación ciudadana ya que se estima que genera un importante aporte al debate legislativo, así como también tiene consecuencias positivas en la percepción de la confianza ciudadana en el funcionamiento de las instituciones

**Antecedentes relevantes:**

- a. Se busca que los ciudadanos entreguen su opinión sobre iniciativas legales, además de contribuir en la convivencia democrática. Se espera lograr a través de un reglamento que fortalece mecanismos de participación y establece procedimientos claros y transparentes, es importante señalar que también se pretende que ambas cámaras suscriban dicho reglamento.
- b. La iniciativa se enmarca en un acuerdo pactado en la "Declaración de Santiago sobre Transparencia e Integridad en los Parlamentos y Partidos Políticos", el 13 de enero de 2012, al concluir el "Seminario Internacional de Transparencia y Probidad en el Congreso Nacional y en el Sistema de Partidos Políticos".
- c. El proyecto de ley que pretende regular la participación ciudadana del Senado, rigiendo 3 principios como ejes centrales: representatividad, transparencia y responsabilidad. Además de reconocer 5 formas de participación ciudadana (audiencias públicas, congreso Virtual, consultas públicas, jornadas temáticas, foro ciudadano) y el respectivo procedimiento. Los interesados podrán solicitar participar por propia iniciativa, enviando un documento con su opinión, sosteniendo una entrevista presencial o por video conferencia en la cual se consigne el aporte que pueden efectuar.
- d. De aprobarse este reglamento, entrará en vigencia 120 días después de su aprobación

**Sugerencia de votación:** A favor: democratizar y hacer parte a la ciudadanía en la discusión de los temas que les importan es clave para el desarrollo y construcción en conjunto del país. Así como también mejora la confianza y la imagen de las instituciones.

## 2. Boletín 2139-12

Proyecto de acuerdo por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas que se proponen para fortalecer la participación de la mujer en la industria minera.

**Objetivo:** El proyecto de acuerdo tiene por finalidad evitar la discriminación que se ha llevado a cabo en contra las mujeres en el sector minero, y fortalecer el rol y participación de ellas.

### **Antecedentes relevantes:**

- a- Según los autores, Codelco ha realizado una desvinculación masiva de mujeres, lo que va en directa contradicción con los compromisos asumidos en la Mesa Mujer y Minería, la que buscaba mejorar y aumentar la participación de mujeres en la minería chilena.
- b- Se ha evitado la contratación de mujeres mayores a 50 años en el sector, y se ha desvinculado a aquellas que tienen más de 50 años.
- c- Se ha despedido más de 100 mujeres en los últimos 7 meses en los distintos distritos.

### **Proyecto de Acuerdo Solicita:**

- a- Se solicita al Ejecutivo enviar un proyecto que potencie la participación de la mujer en la industria minera.
- b- Que el Presidente instruya a Codelco que se implemente la retención de talentos femeninos.
- c- Que el Ejecutivo ordene el cese de las desvinculaciones de mujeres en el sector minero.
- d- Que cesen los acosos laborales.
- e- Que se instruya a la Corporación Nacional del Cobre para que los departamentos de recursos humanos velan por el respeto de los trabajadores y sus familias.
- f- Que se garantice la dignidad humana.
- g- Que se realice una reestructuración de todos Directorios de la Corporación para la participación femenina y la generación de políticas de género.
- h- Que se realice un seguimiento a las denuncias de acoso laboral realizadas.

**Sugerencia de votación:** Se sugiere abstenerse. Si el proyecto sólo se dedicara a hacer cumplir las normas dictadas en materia de género, no habría problema alguno en aprobarlo. Sin embargo, este proyecto da un paso adicional y busca dar un paso hacia la designación de cuotas dentro de la minería.

Además, se solicita al Ejecutivo a realizar un seguimiento de las denuncias de acoso laboral, en condiciones que el Ejecutivo no puede inmiscuirse en asuntos que son propios del poder judicial.